

plaza pública para la edición del 3 de septiembre de 1996

Fuerza del Estado

miguel ángel granados chapa

Tras asistir a San Lázaro a la lectura del segundo informe, vi en la televisión al Presidente Zedillo, y comprobé lo que a la distancia había sido sólo una intuición. Su semblante y su gesto se endurecieron en el único momento en que se dejó embargar por la emoción, precisamente al anunciar que perseguiría los actos terroristas (del Ejército Popular Revolucionario, al que no mencionó por su nombre aunque estaba claramente implicado), “con toda la fuerza del Estado”. Al mismo tiempo, las crónicas han consignado que ese pronunciamiento fue el más aplaudido por una amplísima porción de los asistentes, aparentemente urgidos de una política de mano dura. Esa manifestación presidencial, y esa conjunción de estados de ánimo, son lo más sobresaliente del informe en sí mismo, si hacemos salvedad de lo ocurrido entre legisladores e invitados, es decir el sainete protagonizado por el diputado Marcos Rascón, los ex diputados Diego Fernández de Cevallos y Felipe Calderón, y el futuro diputado Víctor Flores, que ganó ya una curul tras enseñar cuál será su aportación a la próxima legislatura.

Parece que otros combates esbozados en el documento presidencial enardecen menos al protagonista y a la mayor parte de sus invitados. Fue menor el entusiasmo generado por las declaraciones de guerra a la crisis, la enfermedad, la ignorancia o la pobreza. Nadie aplaudió cuando el Presidente Zedillo ofreció noticia sobre el modo en que, a su juicio, va siendo doblegada la fase crítica de la economía, desatada en diciembre de 1994. No se sabe si el silencio ante afirmaciones contundentes como “el país superó la etapa de emergencia económica y ha iniciado claramente la recuperación” fue producto del descreimiento, o de la sorpresa, o de que al comenzar el informe se observaba una suerte de envaramiento, que impidió los aplausos durante un largo primer tramo de la lectura presidencial.

Pero ya las manos se habían calentado cuando el Presidente estableció la triple perseverancia, que en realidad (como ocurre con otro dogma, el de la Santísima Trinidad), está integrada por tres reglas distintas y un solo credo verdadero, el resumido en el primer “quehacer esencial”, consistente en “seguir aplicando el programa económico”, que incluye contar con “una economía cada vez más eficiente” y también el “aumentar significativamente el ahorro nacional”. El ahorro forzoso, se entiende, el que implica la retención de cuotas antes de que el salario llegue a los bolsillos de los trabajadores, porque una vez aplicado al gasto será difícil que se produzcan remanentes en la economía familiar. Y sin embargo, quizá por esta última certidumbre, los asistentes al informe, que se pusieron de pie ante la amenaza al terrorismo, no se rompieron las manos para aplaudir la ratificación del camino. Quizá fueron cautos al cobrar conciencia de que parte importante del programa financiero ha “significado comprometer recursos fiscales presentes y futuros”, y de que el importe de esos recursos no es una bagatela, pues sólo a consolidar el sistema bancario (“no...para respaldar a los accionistas de los bancos”, sino “para proteger la integridad de los recursos depositados por las personas, las familias y las empresas en la banca”) se destinarán “más de 180 mil millones de pesos que se irán erogando a lo largo de varios años”.

Puesto que no se trata de vencer a un enemigo de “todos”, sino “sólo” de los menesterosos, que no estaban representados en San Lázaro, hubo sólo palmas tibias, como rezan las crónicas taurinas, cuando se utilizó el lugar común de presentar como “esfuerzo sin precedente” la decisión de “llevar un paquete básico de salud a las zonas más pobres y aisladas”, que en lo inmediato alcanzará a 380 de los 600 municipios más pobres. Y la misma suerte corrió el anuncio de la medida complementaria: un programa piloto que incluye acciones de alimentación, salud y educación básica en “algunas de las regiones de mayor marginalidad”.

Quizá el menor entusiasmo del auditorio obedecía al tono semejante en el emisor, que quizá no está persuadido de la

necesidad y conveniencia del gasto social. Lo digo porque, a menos que simplemente se haya rendido a la frase hecha, no se comprende a qué padecimiento y de quién se refirió el Presidente al anunciar un gasto de 23 mil 400 millones de pesos para la educación media superior y superior. ¿Qué significa decir que “se trata de un esfuerzo que vale mucho la pena”? ¿Cuál pena? ¿Qué costo se paga haciendo esa inversión? ¿Para quién es una carga, una pena digna de ser llevada resignadamente, que se disponga de esa cantidad de recursos fiscales para una tarea de que el gobierno no puede abdicar?

Pero veamos la cara positiva de la casi unanimidad con que el público presente en San Lázaro aprobó la ruda advertencia presidencial. Esa actitud denota que su definición contraria a las “posturas ambiguas” frente a la violencia es compartida por todo el sector participante de la sociedad. No es preciso abundar en la enorme ventaja política que un asentimiento generalizado ofrece al poder frente a un enemigo que pretende imponer las reglas de un juego peligrosísimo en lo inmediato (por las vidas que siega) y portador de un riesgo aun mayor (por el desafío que lanza sobre las capacidades de la sociedad y el Estado de regular la convivencia). Ubicado en una sólida plataforma de apoyo social, puede el Presidente convertir en realidad su oferta de combatir la nueva insurgencia armada con el rigor de la ley, sin “provocar represión a terceros inocentes” y “respetando las garantías individuales y los derechos humanos”

Porque allí estriba la peligrosidad del autoritarismo enunciado desde el poder y compartido por una porción de la sociedad, en que se juzgue inútil y hasta contraproducente la fijación de límites a la lucha contra el terrorismo. En sentido contrario a la decisión presidencial, en los hechos se está violentando la ley en la pretensión de combatir al EPR. En Guerrero y Oaxaca, agrupaciones sociales y sus líderes están siendo hostigados y perseguidos como parte de los arbitrios antiterroristas. Espero que no parezca una actitud ambigua declarar que el Estado no puede lanzar su fuerza

contra sus adversarios sin mantenerse dentro de fronteras bien delimitadas. Si el Estado se fascina por la tentación de la eficacia, y supone que en pos de alcanzarla todo está permitido, pervierte sus fines y se asemeja tanto a la delincuencia contra la que lucha, que desaparece la diferencia entre uno y otra. La eliminación de esa diferencia suprime también la ilicitud del apoyo al terrorismo, pues se coloca a la conciencia ciudadana en el terrible dilema de optar entre males, a cuál peor.

Título: Plaza Pública/ Fuerza del estado
Fuente: Reforma
Fecha: 03/09/1996
Folio: 45348
Medida: 7623

Plaza Pública / Fuerza del estado

Miguel Angel Granados Chapa

El pronunciamiento presidencial de que perseguiría los actos terroristas (del EPR, al que no mencionó por su nombre aunque estaba claramente implicado), "con toda la fuerza del Estado", fue el más aplaudido por una amplísima porción de los asistentes, aparentemente urgidos de una política de mano dura.

La casi unanimidad con que el público presente en San Lázaro aprobó la ruda advertencia presidencial denota que su definición contraria a las "posturas ambiguas" frente a la violencia es compartida por todo el sector participante de la sociedad.

Tras asistir a San Lázaro a la lectura del segundo Informe, vi en la televisión al presidente Zedillo, y comprobé lo que a la distancia había sido sólo una intuición. Su semblante y su gesto se endurecieron en el único momento en que se dejó embargar por la emoción, precisamente al anunciar que perseguiría los actos terroristas (del Ejército Popular Revolucionario, al que no mencionó por su nombre aunque estaba claramente implicado), "con toda la fuerza del Estado". Al mismo tiempo, las crónicas han consignado que ese pronunciamiento fue el más aplaudido por una amplísima porción de los asistentes, aparentemente urgidos de una política de mano dura. Esa manifestación presidencial, y esa conjunción de estados de ánimo, son lo más sobresaliente del Informe en sí mismo, si hacemos salvedad de lo ocurrido entre legisladores e invitados, es decir el sainete protagonizado por el diputado Marco Rascón, los ex diputados Diego Fernández de Cevallos y Felipe Calderón, y el futuro diputado Víctor Flores, que ganó ya una curul tras enseñar cuál será su aportación a la próxima Legislatura.

Parece que otros combates esbozados en el documento presidencial enardecen menos al protagonista y a la mayor parte de sus invitados. Fue menor el entusiasmo generado por las declaraciones de guerra a la crisis, la enfermedad, la ignorancia o la pobreza. Nadie aplaudió cuando el presidente Zedillo ofreció noticia sobre el modo en que, a su juicio, va siendo doblegada la fase crítica de la economía, desatada en diciembre de 1994. No se sabe si el silencio ante afirmaciones contundentes como "el país superó la etapa de emergencia económica y ha iniciado claramente la recuperación" fue producto del descreimiento, o de la sorpresa, o de que al comenzar el Informe se observaba una suerte de envaramiento, que impidió los aplausos durante un largo primer tramo de la lectura presidencial.

Pero ya las manos se habían calentado cuando el Presidente estableció la triple perseverancia, que en realidad (como ocurre con otro dogma el de la Santísima Trinidad), está integrada por tres reglas distintas y un solo credo verdadero, el resumido en el primer "quehacer esencial", consistente en "seguir aplicando el programa económico", que incluye contar con "una economía cada vez más eficiente" y también el "aumentar significativamente el ahorro nacional". El ahorro forzoso, se entiende, el que implica la retención de cuotas antes de que el salario llegue a los bolsillos de los trabajadores, porque una vez aplicado al gasto será difícil que se produzcan remanentes en la economía familiar. Y sin embargo, quizá por esta última certidumbre, los asistentes al Informe, que se pusieron de pie ante la amenaza al terrorismo, no se rompieron las manos para aplaudir la

ratificación del camino. Quizá fueron cautos al cobrar conciencia de que parte importante del programa financiero ha "significado comprometer recursos fiscales presentes y futuros", y de que el importe de esos recursos no es una bagatela, pues sólo a consolidar el sistema bancario ("no... para respaldar a los accionistas de los bancos", sino "para proteger la integridad de los recursos depositados por las personas, las familias y las empresas en la banca") se destinarán "más de 180 mil millones de pesos que se irán erogando a lo largo de varios años".

Puesto que no se trata de vencer a un enemigo de "todos", sino "sólo" de los menesterosos, que no estaban representados en San Lázaro, hubo sólo palmas tibias, como rezan las crónicas taurinas, cuando se utilizó el lugar común de presentar como "esfuerzo sin precedente" la decisión de "llevar un paquete básico de salud a las zonas más pobres y aisladas", que en lo inmediato alcanzará a 380 de los 600 municipios más pobres. Y la misma suerte corrió el anuncio de la medida complementaria: un programa piloto que incluye acciones de alimentación, salud y educación básica en "algunas de las regiones de mayor marginalidad".

Quizá el menor entusiasmo del auditorio obedecía al tono semejante en el emisor, que quizá no está persuadido de la necesidad y conveniencia del gasto social. Lo digo porque, a menos que simplemente se haya rendido a la frase hecha, no se comprende a qué padecimiento y de quién se refirió el Presidente al anunciar un gasto de 23 mil 400 millones de pesos para la educación media superior y superior. ¿Qué significa decir que "se trata de un esfuerzo que vale mucho la pena"? ¿Cuál pena? ¿Qué costo se paga haciendo esa inversión? ¿Para quién es una carga, una pena digna de ser llevada resignadamente, que se disponga de esa cantidad de recursos fiscales para una tarea de que el gobierno no puede abdicar?

Pero veamos la cara positiva de la casi unanimidad con que el público presente en San Lázaro aprobó la ruda advertencia presidencial. Esa actitud denota que su definición contraria a las "posturas ambiguas" frente a la violencia es compartida por todo el sector participante de la sociedad. No es preciso abundar en la enorme ventaja política de un asentimiento generalizado ofrece al poder frente a un enemigo que pretende imponer las reglas de un juego de peligrosísimo en lo inmediato (por las vidas que siega) y portador de un riesgo aún mayor (por el desafío que lanza sobre las capacidades de la sociedad y el Estado de regular la convivencia).

Ubicado en una sólida plataforma de apoyo social, puede el Presidente convertir en realidad su oferta de combatir la nueva insurgencia armada con el rigor de la ley, sin "provocar represión a terceros inocentes" y "respetando las garantías individuales y los derechos humanos".

Porque allí estriba la peligrosidad del autoritarismo enunciado desde el poder y compartido por una porción de la sociedad, en que se juzgue inútil y hasta contraproducente la fijación de límites a la lucha contra el terrorismo. En sentido contrario a la decisión presidencial, en los hechos se está violentando la ley en la pretensión de combatir al EPR. En Guerrero y Oaxaca, agrupaciones sociales y sus líderes están siendo hostigados y perseguidos como parte de los arbitrios antiterroristas. Espero que no parezca una actitud ambigua declarar que el Estado no puede lanzar su fuerza contra sus adversarios sin mantenerse dentro de fronteras bien delimitadas. Si el Estado se fascina por la tentación de la eficacia, y supone que en pos de alcanzarla todo está permitido, pervierte sus fines y se asemeja tanto a la delincuencia contra la que lucha, que desaparece la diferencia entre uno y otra. La eliminación de esa diferencia suprime también la ilicitud del apoyo al terrorismo, pues se coloca a la conciencia ciudadana en el terrible dilema de optar entre males, a cuál peor.